**ARTÍCULOS ARBITRADOS**



**PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO**

**PROTECTION OF CULTURAL GOODS IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT**

**Alexis Aguilar Domínguez**



**PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO**

PROTECTION OF CULTURAL GOODS IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT

Alexis Aguilar Domínguez\*

**SUMARIO**: I. Introducción; II. Definición de “bien cultural”; III. Algunas convenciones internacionales que salvaguardan los bienes culturales en caso de conflicto armado; IV. La Protección de los Bienes Culturales en la Convención de la Haya de 1954; V. El Segundo Protocolo, su actualización y su reforzamiento; VI. El principio de la responsabilidad penal del individuo en el derecho internacional; VII. El papel de la corte penal internacional en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado; VIII. Destrucción de bienes culturales por el Estado islámico; IX. Conclusiones; X. Fuentes de consulta.

**RESUMEN:** los conflictos armados han estado presentes desde la aparición del hombre, cada uno de ellos con sus particulares diferencias en lo concerniente a la magnitud de éstos, pero siempre llevando consigo la ineludible consecuencia de la pérdida de bienes. Hace poco más de medio siglo se suscitó el último gran conflicto, conocido como Segunda Guerra Mundial, en donde se perdieron números bienes culturales de gran importancia para el acervo cultural de la humanidad, por lo que posteriormente se decidió normar a través de la vía convencional un tratado que protegiera dichos bienes en caso de conflicto armado entre Estados, pero mucho después se adicionó un Segundo Protocolo para los conflictos de carácter no internacional. En la actualidad existe el riesgo de que el Estado islámico siga destruyendo el patrimonio cultural.

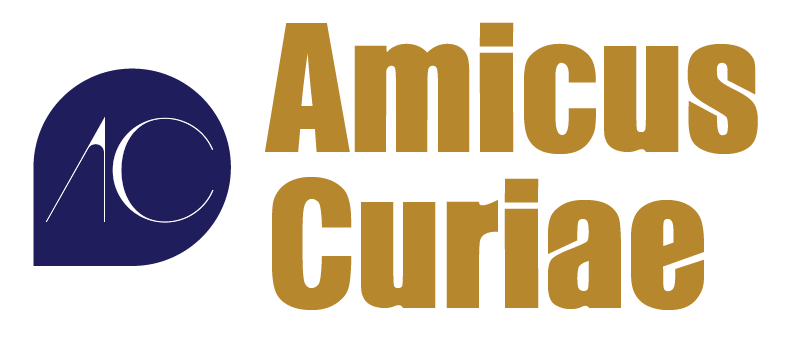
**ABSTRACT:** Armed conflicts have been around since human being appeared on earth, each one marked with its differences with regard to the scale of these conflicts, these exacerbated or enhanced by technological progress and the range of action of individuals, but always carries the inescapable consequence of the loss to property. Just over half a century the last major conflict erupted, called World War II, which lead to a catastrophic loss of some of humanity´s greatest cultural heritage. As a result, our society has established international regulations and treaties to aid in conflict resolutions and loss of properties, but long after a second protocol for local conflicts or non-international it was added. At present there is a risk that the Islamic keep on destroying cultural heritage.

**Palabras clave:** conflicto armado, protección, bienes culturales, responsabilidad internacional, jurisdicción universal, *soft law*.

**Keywords:** Armed conflict, protection, cultural goods, international responsibility, universal jurisdiction, soft law.

\* Abogado postulante en materia civil y catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, impartiendo la materia Derecho Internacional Privado. Especialista en Derecho Internacional Privado y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

*Como botín, podrás retener a las mujeres y a los niños, y el ganado*



*y todo lo demás que haya en la ciudad.*

*También podrás comer del botín de tus enemigos, que te entrega el Señor tu Dios.*

*(Deuteronomio 20:10)*

1. **INTRODUCCIÓN**

La guerra siempre ha estado presente desde los inicios de la humanidad, ésta es el resultado de la condición animal e instintiva del ser humano para protegerse a sí mismo o para imponer su voluntad y cultura, es consecuencia de una de las características de la condición humana, algo tan básico que tiene sus raíces en el instinto más elemental, es decir, el de supervivencia.

Podemos atrevernos a afirmar que la mayor parte de las guerras han sido motivadas por el elemento económico, pero con independencia de estas razones, siempre existirán pérdidas humanas y materiales: entre las que destacan los ya conocidos bienes muebles e inmuebles, muchos de ellos pueden incluirse dentro de la clasificación de bienes culturales.

Si escudriñamos en la historia, durante muchos siglos se consideró que uno de los derechos del pueblo vencedor era el *ius predae* sobre los bienes del pueblo abatido y conquistado, no resulta extraño observar que estos hechos persisten, aun con el paso del tiempo. Es con base en el derecho de gentes que se consintió que fueran destruidas y arrebatadas las cosas de los enemigos, a quienes también se permitía matar.

Polibio, gran historiador griego plasmó en su libro V de Historia Universal Bajo la República Romana, lo siguiente: “Que se comprende por derecho de guerra, que sean arrebatadas o destruidas las municiones de los enemigos, los puertos, ciudades, varones, naves, frutos y otras cosas parecidas”. Se encuentran también en documentos antiquísimos algunos datos que hablan acerca de los botines de guerra, tal y como se aprecia en el siguiente versículo del Génesis, donde Jacob dejando a José sobre todos los hermanos el principal legado dijo: “Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco”.

Podemos contextualizar lo anterior con la primera mitad del siglo XX, específicamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pues es durante el lapso de ésta que se cometieron numerosos actos de apropiación ilegal por medio del régimen nazi en los países invadidos por el Tercer Reich, así como también los actos perpetrados por los países aliados en la propia Alemania.

La Segunda Guerra Mundial es un parteaguas en lo que cabe al saqueo, pillaje y destrucción de bienes culturales, tanta es su relevancia que fue piedra angular en la reacción que tuvo la comunidad internacional, casi después de 10 años del fin de la guerra, al convocar en mayo de 1954 a una conferencia diplomática que tuvo lugar en La Haya bajo los auspicios de la recientemente creada Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como Unesco).

La conferencia diplomática adoptó la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y su protocolo, es importante mencionar que es el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural, debido a que protege tanto bienes inmuebles como bienes muebles; se encargó de establecer en el plano internacional, de manera concreta y vinculante, las reglas de conducta que deben ser acatadas a ser observadas durante un suceso bélico para la preservación de los bienes, muebles o inmuebles que forman el patrimonio cultural.

La protección del patrimonio cultural reviste gran importancia, así lo expresa la misma convención al mencionar que las altas partes contratantes del tratado se encuentran “convencidas de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial”.

Posteriormente, y en vista de los daños perpetrados hacia bienes culturales durante los cuantiosos conflictos, suscitados a finales del año 1980 y principios de 1990, se sacaron a relucir los defectos en la aplicación de la Convención de La Haya. En 1991 se inició un estudio de la convención con la intención de a elaborar un nuevo acuerdo que la hiciera eficaz, partiendo de la experiencia acumulada en los últimos conflictos. Así, en la Conferencia Diplomática, celebrada también en La Haya en marzo de 1999, se adoptó un Segundo Protocolo de la Convención de La Haya.

El presente artículo fue elaborado con el propósito de contar con un panorama general en cuanto a la protección que se le ha otorgado a los bienes culturales hasta hoy, las disposiciones contenidas tanto en la convención, como en sus protocolos, no se abordarán temas que pretendan explicar los motivos que dan origen a una guerra o a resolver la pregunta: ¿por qué actúa de esa manera el ser humano?, debido a que eso es materia de otras ciencias y áreas de estudio. Nos limitaremos a exponer, dentro del campo jurídico, los esfuerzos humanos a nivel internacional para tratar de evitar las consecuencias de la guerra, que han sido concretados y plasmados por la vía convencional para evitar y paliar los destrozos de los bienes culturales.

Aunque es lamentable decirlo, es imposible evitar los daños en bienes culturales *in situ*, donde se origina el conflicto bélico, ya que, recordemos el principio general de derecho que versa “Nadie está obligado a lo imposible”; no obstante, la afirmación anterior es muy loable tratar de protegerlos a través de las convenciones que se han elaborado.

Así como hemos mencionado, este estudio tiene el propósito de presentar un panorama general de la Convención de la Haya, que salvaguarda los bienes culturales, por lo que primero partimos definiendo que es un bien cultural y todo lo concerniente a su naturaleza jurídica, después enumeramos algunas convenciones que protegen a dichos bienes, para estudiar la protección que brinda la convención y su Segundo Protocolo, además de ver el papel que juega la CIJ en este tipo de actos en contra de bienes culturales, para después estudiar el caso particular que se vive en la actualidad en el Medio Oriente en Iraq, Siria y Libia, y ya en esta última parte vertimos algunas recomendaciones que pueden ayudar a prevenir la destrucción de bienes culturales.

**II. DEFINICIÓN DE “BIEN CULTURAL”**

En líneas anteriores hemos podido constatar que los bienes culturales tienen gran relevancia en el ámbito del derecho, pero este término es de reciente creación y encontramos su primera definición legal en la Convención de la Haya de 1954, la cual considera como bienes culturales los siguientes:

1. *Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;*
2. *Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a.;*
3. *Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a. y b., que se denominarán «centros monumentales.*

La categorización que incorporó la convención respecto a los bienes culturales protege tanto bienes muebles como inmuebles, con la única exigencia de que los mismos “tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”; y amplía el amparo a los edificios utilizados para exponer o conservar bienes culturales a “los centros que comprendan un número considerable” de bienes culturales, sin importar cualquiera que sea su origen y propietario.La definición que maneja la Convención de 1954 se enfoca en aquellos bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, así como también aquellos bienes culturales que tengan un gran interés histórico o artístico. Lo que se trata de impedir con este tipo de definiciones es hacer una lista taxativa, exhaustiva o limitativa, para así evitar la exclusión de bienes culturales.

Es una tarea complicada conceptualizar un “bien cultural”, ya que puede resultar inconveniente intentar realizarlo sólo a través de la ciencia jurídica, debido a que una definición de bienes culturales, por su naturaleza, se aloja en el ámbito transdisciplinario. A diferencia de los que afirmaba Hans Kelsen, el derecho y los juristas deben recurrir a otras disciplinas diferentes a la jurídica, tales como arqueología, historia, historia del arte, pintura, etc., para tratar de dotar de contenido al concepto de bien cultural y en consecuencia poder elaborar una definición, en otras palabras, nos encontramos con “nociones abiertas que el ordenamiento jurídico regula reenviando su definición a ciencias no jurídicas”.[[1]](#footnote-1)

1. **DIFERENCIA ENTRE BIEN CULTURAL Y PATRIMONIO CULTURAL**

Comúnmente suelen utilizarse indistintamente las expresiones referentes a “bien cultural” y “patrimonio cultural”, pero es correcto y necesario hacer la distinción entre ambos. Existen diversas opiniones, entre ellas encontramos las siguientes:

*-algunos prefieren el binomio “patrimonio cultural” porque expresa mejor qué es el conjunto de “bienes culturales”; otros dicen que es más adecuado por razón de su apertura y de su uso en distintos ámbitos (internacional, eclesial, etc.); o porque “patrimonio cultural” no son sólo bienes patrimoniales, bienes materiales, sino también actividades con valor en la historia de la civilización, aunque no conformados por bienes objeto de un derecho patrimonial.*

*-otros autores opinan que es más correcto hablar de “bien cultural” porque es una síntesis expresiva de la relación entre patrimonio del arte y cultura o porque es una noción más amplía que patrimonio, ya que en su valor cultural se destacan categorías de funcionalidad sobre aquellas de la propiedad o posesión de la representación material del arte y la historia; y también porque el elemento objetivo “del valor cultural” es el que delimita los bienes sometidos a una disciplina unitaria, desvinculada de la titularidad de los mismos, aunque también se tienda a salvaguardar su titularidad.*[[2]](#footnote-2)

De lo anterior podemos decir que el contenido de patrimonio cultural[[3]](#footnote-3) es mucho más extenso que el de bien cultural, ello porque el primero no se limita únicamente, por ejemplo, a monumento y colecciones de objetos, sino que también se consideran a las expresiones vivas o tradiciones de los pueblos, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a las siguientes generaciones[[4]](#footnote-4), por lo que el patrimonio cultural incluye a los bienes culturales.

En la redacción del propio artículo 1° de la Convención de la Haya de 1954, podemos considerar al patrimonio cultural como el género y al bien cultural como la especie, toda vez que en el artículo 1° menciona que se consideraran bienes culturales, aquellos muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos.

En el año de 1964 en Italia, se creó la Comisión Legislativa de Franceschini con el objetivo de abordar el estudio de los bienes de interés histórico artístico. Esta comisión estimó que debía considerarse incluido en el patrimonio cultural “il bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civilitá”.[[5]](#footnote-5)

1. **TEORÍA QUE EXPLICA LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS BIENES CULTURALES**

La convención no establece una definición precisa, en cuanto a qué debe entenderse por bienes culturales. Existen tres teorías[[6]](#footnote-6) que tratan de explicar lo relativo a la naturaleza jurídica de estos bienes, en el presente artículo nos referiremos únicamente a la teoría de la propiedad dividida, la cual es la mayormente usada y aceptada por los doctrinarios.

De entre adeptos de la teoría de la propiedad dividida, destaca un autor de origen italiano, llamado Giannini, quien afirma que ésta permite clarificar el sentido y los límites de las potestades administrativas sobre los bienes culturales, pues distingue y respeta a la propiedad privada, pero a la vez existe una utilidad de gozo pública, de la cual es titular el Estado quien estará encargado de asegurar y proteger.

Podemos distinguir de esta teoría dos elementos:

1. **El elemento material:** la cosa sobre el que recaen los intereses de contenido patrimonial sometidos al derecho privado.
2. **El elemento inmaterial:** el bien sometido a una determinada utilidad, en este caso cultural. La naturaleza cultural del bien lo convierte en objeto de “fruición colectiva”, bajo la tutela del Estado, el cual tiene el poder suficiente para poder garantizar el disfrute social de la cosa.[[7]](#footnote-7)

Motilla de la Calle, señala que la categoría de bienes culturales se caracteriza por:

* La función inmaterial que cumplen en el progreso del conocimiento y perfeccionamiento de la personalidad del individuo.
* Su naturaleza social y el interés colectivo.
* Publicidad en aras de su conservación y disfrute social.[[8]](#footnote-8)

**III. ALGUNAS CONVENCIONES INTERNACIONALES QUE SALVAGUARDAN LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO**

El acuerdo trascendental de derecho internacional público referente al resguardo de los bienes culturales, es la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, su reglamento de aplicación, así como sus Protocolos de 1954 y de 1999. Es importante mencionar que concurren otros acuerdos que contienen prácticas concernientes a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Se habla en específico de:

* Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, 1970.
* Protocolo I adicional de 1977 (el Protocolo I se aplica en las situaciones de conflicto armado internacional) a los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, y
* Protocolo II adicional de 1977 ( el Protocolo II se aplica en las situaciones de conflicto armado **no internacional**) a los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, y
* Estatuto de Roma de 1988 de la Corte Penal Internacional (en adelante Estatuto de la Corte Penal Internacional).
* Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 2001.

**IV. LA PROTECCIÓN A LOS BIENES CULTURALES EN LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954**

El artículo 1° de la convención menciona qué debemos entender por bienes culturales y a la vez en los apartados a) y b) del citado numeral, realiza categorizaciones que no son exhaustivas o limitativas, sino simplemente indicativas o enumerativas, lo anterior se colige de un análisis de la redacción utilizada.

Con el propósito de explicar que la protección es indistinta y evitar cualquier incertidumbre sobre los bienes, describe que son cualesquiera que sea su origen y propietario, es decir, sin importar sea de propiedad privada, si reúne las características que menciona el citado numeral, estos serán bienes culturales aunque sean propiedad de particular.

El artículo 3° de la convención compromete a sus Estados parte a “preparar en tiempo de paz la salvaguarda de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas”. Sin embargo, la convención guarda un silencio prácticamente absoluto respecto de cuáles son esas medidas. Algo similar ocurre con la conducta a observar cuando se produce un conflicto armado o el mismo es inminente.

Podemos apreciar que el artículo 4° alude a obligaciones de no hacer o de cuidado que podrían considerarse elementales, tales como no colocar a los bienes culturales en una situación de riesgo o abstenerse de tomar medidas de represalia contra dichos bienes.

Como hemos podido observar, la Convención de La Haya de 1954 dispone de una protección general para los bienes culturales, pero también hace mención de una protección especial para los mismos, entonces distingue entre dos tipos de protección a los bienes culturales:

1. Aquellos que gozan de una protección general, y

2. Aquellos otros que, por su excepcional importancia, gozan de una protección especial.

Sólo los bienes culturales a los que se le otorga la protección especial no entran en la vaguedad antes mencionada a que hace referencia el artículo 4°, párrafo 2, ya que en el artículo 11, párrafo 2° de la Convención se concreta que la necesidad militar de atacar bienes culturales bajo protección especial, sólo podrá declararse por un jefe militar de unidad igual o superior a una División, pero no hace mención de cómo delimitar el uso de una necesidad militar imperativa.

De manera general, para alcanzar tal status, estos bienes deben reunir dos condiciones mínimas:

1. Deben encontrarse a suficiente distancia de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible.

2.No deben ser utilizados para fines militares.

Un bien cultural bajo protección especial debe inscribirse en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial, para que pueda otorgársele desde ese momento la protección especial, también debe hacerse efectivo el compromiso adquirido por las Altas Partes Contratantes de garantizar la inmunidad de este tipo de bienes.

1. **LAS EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES Y DE BIENES CULTURALES BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL**

Los deberes para la protección de bienes culturales enunciados en el artículo 2°, y que son ampliados tanto en el artículo 3° y 4° de la Convención poseen una limitante, y ésta se encuentra en el artículo 4°, párrafo 2, toda vez que autoriza que los deberes antes enunciados no son observados “en el caso de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento”.

Lo inquietante es que ni en la propia Convención, ni en su reglamento se menciona que se debe entender por una *necesidad militar imperativa*, tampoco se pronuncia respecto al rango jerárquico que debe tener dentro del ejército quien ordene el ataque bajo dicha circunstancia. Es apreciable en cualquier sentido que dicha disposición es altamente subjetiva y que una Estado Parte podría considerar a su arbitrio tal necesidad y en consecuencia hacer un ataque a los bienes culturales.

Existen también excepciones presentes en la convención para los bienes culturales que se encuentren bajo protección especial. Una de estas excepcione la podemos encontrar en el párrafo 5 del artículo 8°, el cual menciona que se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a lo que *contrario sensu* sería que no se le dará protección alguna a un bien cultural si éste le da uso armado al objetivo, y obtiene mayor importancia cuando se habla de puertos, estaciones ferroviarias y aeródromos, es lógico que se enfaticen los lugares anteriormente señalados, ya que se trata de puntos de acceso que pueden ser utilizados como puntos estratégicos.

La segunda excepción para la protección de bienes culturales bajo protección especial, se encuentra contenida en el artículo 11°, éste establece la excepción de poder llevar a cabo cualquier acto de hostilidad a los bienes culturales bajo protección especial, pero tomando en cuenta lo establecido por el artículo 9°, por lo que para no respetar la inmunidad de dicho bien, se debe seguir siempre las siguiente premisa: El bien cultural bajo protección especial deberá ser utilizado con fines militares. El artículo 11° menciona que se le debe pedir que cese dicha violación, es decir, que dejen de utilizar ese bien cultural con fines militares dentro de un plazo razonable.

1. **LAS SANCIONES POR LOS ACTOS ILÍCITOS EN LA CONVENCIÓN**

En la Convención, sólo se hace presente un artículo que hace alusión a los resultados que se pueden desencadenar cuando existe una violación a las normas que reglamentan la protección propuestas en la Convención. El artículo 28 menciona que los Estados parte “se comprometen a tomar, dentro de su marco de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente Convención”.

Es importante recalcar lo que menciona esta disposición, ya que como indicamos anteriormente, una de las consecuencias del *soft law* materiales repercutir en el orden jurídico interno y crear *lege ferenda*, aquí mismo podemos ver un ejemplo clásico de dicha consecuencia del *soft law* material.

Como sucede con otros aspectos de la Convención, es necesario destacar en primer lugar, el avance que representa esta cláusula para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. El *soft law* material presente en este artículo “obliga” a los Estados parte a establecer un tipo penal expreso, esto quiere decir, que no se localice dentro del tipo penal ya enunciado, como sería el caso del delito de daño en propiedad ajena, sino que sea parte de otro delito aún no tipificado, o podría ser el caso que se incorporara ese delito en una ley especial.

Para cumplir con lo dispuesto en el Convenio, México incluyó la siguiente disposición dentro de una Ley Federal que se publicó el 6 de Mayo de 1972, el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos considera: ***“***Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico ohistórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondráprisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

En el Código de Justicia Militar que data del año 1933, mismo que fue publicado en Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1933, menciona en su artículo 209 del Código de Justicia Militar lo siguiente: “Se castigará con la pena de doce años de prisión al que, sin exigencia extrema de las operaciones de la guerra, incendie edificios, devaste sementeras, saquee pueblos o caseríos, ataque hospitales, ambulancias o asilos de beneficencia dados a conocer por los signos establecidos, o cuyo carácter pueda distinguirse a lo lejos de cualquier modo, **o destruya bibliotecas, museos, archivos, acueductos u obras notables de arte**; así como vías de comunicación”.

En México se hablaba de imponer sanciones desde antes de la Convención de 1954, para quienes atacaran bibliotecas, museos, archivos, acueductos u obras notables de arte.

Al artículo 209 del Código de Justicia Militar se le adicionó un último párrafo que se publicó el 29 de Junio de 2005, y a la letra dice: *“*Los promovedores se les impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión”.

El artículo 28 de la citada convención es demasiada subjetiva y flexible, ya que deja al arbitrio de cada Estado contratante tipificar el delito, lo cual conlleva a redactar la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerada como delito y, a los que se les asigna una pena o sanción

**V. EL SEGUNDO PROTOCOLO, SU ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO**

Los actos de bestialidad perpetrados hacia bienes culturales a finales del año 1980 y principios de 1990 sacaron a relucir los defectos en la aplicación de la Convención de La Haya. En 1991 se inició una estudio de la convención con la intención de a elaborar un nuevo acuerdo que la hiciera más eficaz, partiendo de la experiencia acumulada en los últimos conflictos. Así, en la Conferencia Diplomática celebrada en La Haya en marzo de 1999, se adoptó un Segundo Protocolo de la Convención de La Haya.

Los actos de destrucción ocurridos durante la década de los noventa, pusieron de manifiesto las deficiencias tanto de la convención como de su protocolo, lo cual generó la urgente necesidad de actualizarlas, por lo que a iniciativa de los Países Bajos y de la propia Unesco se impulsó la revisión de sus objetivos y funcionamiento. Esto se debió a la destrucción de bienes culturales causados en el marco del conflicto entre las naciones surgidas del proceso de desintegración de la entonces República Socialista Federativa de Yugoslavia, también como a la Guerra del Golfo de 1990-1991 que también ocasionó numerosos ataques a bienes culturales.

El Protocolo de 1999 prevé la "protección reforzada" para algunos bienes culturales, pero es requisito *sine qua non* llenar las siguientes exigencias: [[9]](#footnote-9)

1. Que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad;
2. Que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; y
3. Que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines.

También es de gran ayuda el fondo del cual habla el artículo 29 del Segundo Protocolo, para países como el de México que no tiene suficientes recursos financieros para llevar a cabo las medidas preparatorias en tiempo de paz y las medidas pertinentes difusión de los bienes culturales.[[10]](#footnote-10) Por medio de este fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado puede brindar asistencia financiera, o de otra índole. El párrafo b) del mencionado artículo 29 también menciona que la asistencia no sólo se enfoca en la prevención sino también a la protección de bienes culturales cuando ya está presente el conflicto, y si hubiese destrucción de dichos bienes, a la reconstrucción de los mismos luego de finalizado el conflicto.

1. **ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SEGUNDO PROTOCOLO**

En cuanto a su ámbito de validez territorial, el Segundo Protocolo se aplica a conflictos armados tanto internacionales comono internacionales.[[11]](#footnote-11) Una de las grandes diferencias con la Convención de 1954, es que ésta sólo hace obligatorio como mínimo lo referente a las disposiciones relativas al respeto de los bienes culturales, y el Segundo Protocolo es aplicable en su totalidad a los conflictos no internacionales.

La totalidad de su aplicacióna los conflictos armados no internacionales es un reflejo de lo que sucede hoy en día, va de acuerdo con lo que sucede en el mundo actual, porque como sabemos gran parte de los conflictos armados en la actualidad son de carácter no internacional.

Existen logros obtenidos desde la aprobación de la Convención de La Haya de 1954. El Primer Protocolo de la Convención, tan sólo estable establece un sistema coherente de represión penal que corresponde únicamente a los conflictos armados internacionales. Es entonces de suma importancia que todo el Segundo Protocolo, incluida la sección relativa a la represión penal, se aplique a los conflictos armados no internacionales.

Ello refleja la tendencia moderna de legislación según la cual, por ejemplo, cuando se trata de reprimir las violaciones al derecho internacional humanitario, no se establece ya distinción alguna entre conflicto armado internacional y no internacional. Por lo demás, de conformidad con su Estatuto, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos contra bienes culturales tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.

El Segundo Protocolo de 1999retoma lo ya abarcado en el artículo 3 de la Convención, pero ahora enuncia indicaciones respecto a las medidas de salvaguardia que los Estados deben tomar en tiempo de paz, para así poder hacer mejor frente a los efectos que conllevan por sí mismo un conflicto armado*.* Estas medidas radican en: “la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia, la protección in situ de los bienes culturales muebles o su traslado en condiciones adecuada, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguarda de dichos bienes”.[[12]](#footnote-12)

1. **QUE SE ENTIENDE POR NECESIDAD MILITAR IMPERATIVA**

En el Segundo Protocolo por fin se enuncian los casos en que se podrá actuar bajo una necesidad militar imperativa, ya que en la Convención de La Haya de 1954 no se hace referencia alguna.[[13]](#footnote-13)Es necesario estudiar el innovador artículo 6 del Segundo Protocolo que de manera concreta limita el concepto de necesidad militar en atención a la noción de objetivo militar de la siguiente manera:

A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4 de la Convención:

*a) una derogación fundada de una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2° del artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que:*

*i) ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; y*

*ii) no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo;*

*b) una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2° del artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente;*

*c) la decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficia que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera;*

*d) en caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.*

De las disposiciones anteriores nos podemos percatar que una vez que un bien adquiere el carácter de objetivo militar éste puede ser destruido, y es en el artículo 1° del presente protocolo donde encontramos una definición de lo que se debe entender por objetivo militar: “se entenderá un objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.

En segundo lugar, el único requisito que está establecido en la convención es básicamente una necesidad militar imperativa, si tenemos en cuenta que la palabra imperativo, es sinónimo de una exigencia u obligación, entonces la palabra imperativo queda aclarada en el artículo 6, apartado a), subapartado ii) del Segundo Protocolo, el cual dice: “no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo”.Podemos entender que se vuelve una obligación para fines militares, destruir ese bien cultural que la otra Parte lo ha vuelto un objetivo militar, porque de otra manera no se podría obtener una ventaja de carácter militar, es requisito *sine qua non* destruir dicho bien para obtener una ventaja.

En teoría podemos decir que en pocas ocasiones se dará un ataque de acuerdo con lo que establece el artículo 6 en su apartado a) y sus apartados i) y ii-9, ya que es necesario que se cumplan ambas, y en muchas ocasiones podrá ser posible esquivar dichos bienes culturales.

El artículo 13 del Segundo Protocolo también habla sobre la excepción de la necesidad militar en relación con los bienes culturales bajo protección reforzada.[[14]](#footnote-14) No obstante, es importante mencionar que dos de los requisitos que se enumeran también en el artículo 6 del Segundo Protocolo, fueron mejorados, estas mejoras son:

* Que el ataque haya sido ordenado por el nivel más alto del mando operativo. Cuando para los bienes bajo protección general se exige que la decisión sea tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera;[[15]](#footnote-15) y,
* Que se haya dado se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización de dicho bien como objetivo militar y se le haya concedido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para regularizar tal situación. Cuando para los bienes bajo protección general sólo se requiere que se avise con la debida anticipación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.[[16]](#footnote-16)

1. **LAS SANCIONES POR LOS ACTOS ILÍCITOS EN EL SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN**

El capítulo 4 del Segundo Protocolo explica y actualiza el artículo 28 de la Convención de 1954. El Segundo Protocolo desarrolla todo un capítulo relativo a la responsabilidad penal del individuo en caso de la violación de dicho ordenamiento, así como en los casos en que serán competentes los Estados para asumir jurisdicción.

El protocolo otorga jurisdicción respecto a las siguientes violaciones:

1. *hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;*
2. *utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;*
3. *causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala;*
4. *hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el presente Protocolo;*
5. *robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.* [[17]](#footnote-17)

La diferencia entre ambos tipos de protección yace básicamente en las obligaciones de quien tenga los derechos sobre el bien cultural, de tal forma que en el caso de la protección general, el titular del bien tiene derecho, si es necesario, a convertir el bien en objetivo militar utilizándolo para una acción militar. En el caso de la protección especial, es requisito para entrar en dicha categoría que el bien cultural no sea utilizado para fines militares.

En el caso de la protección reforzada, el titular del bien nunca tiene derecho a convertir el bien para que sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares. Además de eso se exige una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines. Aquellos que hayan utilizado dichos bienes bajo protección reforzada, incluidos en la Lista de Bienes bajo Protección Reforzada equivale a una violación grave del Segundo Protocolo y el infractor que sería Estado titular del bien estaría sujeto a una sanción penal.[[18]](#footnote-18)

**VI. EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL**

Gracias al proceso de humanización que ha sufrido el derecho internacional contemporáneo, debido en gran parte a los sucesos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a reconocer la responsabilidad del individuo en el plano internacional.

La figura de la responsabilidad penal internacional del individuo está ligada estrechamente a la postura que guarda la persona individual en el derecho internacional contemporáneo, lo anterior tiene su origen en gran medida como resultado del Juicio de Núremberg, desarrollado en la ciudad alemana de [Núremberg](http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAremberg) entre [1945](http://es.wikipedia.org/wiki/1945) y [1946](http://es.wikipedia.org/wiki/1946), dirigido a partir del [20 de noviembre](http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre) de [1945](http://es.wikipedia.org/wiki/1945) por el Tribunal Militar Internacional (TMI), cuyo sustento era la [Carta de Londres](http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Londres)[[19]](#footnote-19), también los llamados Principios de Núremberg adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946,[[20]](#footnote-20) y de las Resoluciones de creación de los Tribunales Penales Internacionales *ad hoc* para la antigua Yugoslavia[[21]](#footnote-21) y Ruanda[[22]](#footnote-22), expedidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 y en 1994, la reciente Conferencia Diplomática de Roma aprobó el 17 de julio de 1998 el Estatuto de la Corte Penal Internacional de carácter permanente. Los artículos 1 y 25 de dicho Estatuto consagran la responsabilidad penal de toda persona acusada de la comisión de un delito contra el derecho internacional en una de las tres categorías siguientes: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (tales como la desaparición forzada de personas, la tortura y las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos); y permiten su persecución y juzgamiento por la nueva jurisdicción penal internacional cuando la respectiva jurisdicción penal nacional no quiera o no pueda cumplir esta función.

En el derecho internacional clásico el individuo carecía de imputabilidad para responder de su responsabilidad, esto era consecuencia del dominio absoluto de la subjetividad internacional del Estado, considerado no sólo como sujeto pleno de derecho internacional sino como sujeto único. Esto no quiere decir que el individuo fuese íntegramente extraño para el ordenamiento jurídico internacional, pues desde el siglo XIX hasta el siglo XX se adoptaron tratados que recogían la ilicitud de determinados comportamientos de individuo, siempre y cuando como afirma Lirola Martínez: “no se hiciera referencia expresa a un principio de responsabilidad penal del individuo”.[[23]](#footnote-23)

Sin perjuicio de la Responsabilidad Civil del Estado, tanto como de la responsabilidad penal internacional del individuo, mismas que pueden llegar a suscitarse simultáneamente, dicha conexidad no afecta la independencia de cada tipo de responsabilidad. Además la naturaleza de que cada una de ellas es distinta, la responsabilidad del Estado es la de reparar los daños ocasionados y la del individuo es de carácter penal.

Como menciona Lira Delgado: “salvo en el supuesto en que un Estado beligerante hiciera uso del derecho consuetudinario a juzgar por violaciones de las leyes y usos de la guerra a los miembros del ejército enemigo en su poder, la tendencia general era la de establecer exclusivamente la responsabilidad del Estado por las violaciones de las leyes y usos de la guerra, aunque ésta llevase aparejada la obligación de reparar los daños y castigar en el plano interno a las personas culpables a estas violaciones”.[[24]](#footnote-24)

El Segundo Protocolo hace mención tanto de la responsabilidad penal individual y del Estado respecto a la responsabilidad de los Estados por la violación de sus disposiciones. El artículo 38 menciona que ninguna de las disposiciones del protocolo relativas a la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación.

Concluimos que es importante el reconocimiento tanto de la responsabilidad penal del Estado, como de la responsabilidad penal internacional del individuo, ya que anteriormente las personas físicas se escudaban en la protección del Estado, éstas actuaban tras bastidores y fue entonces a partir de los acontecimientos bélicos del siglo pasado lo que estimuló a los Estados a determinar la responsabilidad penal internacional de los individuos.

1. **APLICACIÓN INDIRECTA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO**

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado optó por lo que se conoce el sistema de aplicación indirecta que deja la ejecución de dicha responsabilidad, en la mayoría de los casos, a cada Estado. En efecto, con carácter general, la actuación del derecho internacional en materia penal se limita al plano normativo de la tipificación de los comportamientos que dan lugar a responsabilidad penal, dejando, en cambio, salvo contadísimas excepciones, el aspecto institucional de la sanción a los Estados que son los que mantienen el monopolio de la competencia represiva, como una manifestación más del ejercicio de su soberanía. Esto se debe en gran parte a la resistencia de los Estados a la creación de tribunales penales supranacionales.

No obstante que este método permita la ejecución de la responsabilidad penal internacional de los individuos a cada Estado, presenta grandes vacíos, como lo afirma Isabel Lirola: “cabe la posibilidad de que ésta no se exija, cuando el Estado no pueda o no esté en condiciones de hacerlo”.[[25]](#footnote-25) Entonces puede ser el caso que el Estado carezca de la voluntad necesaria para llevar a cabo el referido juzgamiento o, de plano, carezca de la capacidad para hacerlo, y de ese manera deje en la impunidad los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto que no deben quedar sin castigo. Ante los hechos anteriormente pronunciados, como lo ilustra Lirola Delgado y Martín Martínez: “La única solución posible consiste en el establecimiento de mecanismos jurisdiccionales universales que completen, o en su caso reemplacen el sistema indirecto de sanción de la responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes de derecho internacional”.[[26]](#footnote-26)

La comunidad internacional ha hecho un avance de suma importancia con la recepción de la Corte Penal Internacional[[27]](#footnote-27), cabe recordar que la jurisdicción de la Corte es complementaria a las jurisdiccionales nacionales, esto va de acuerdo respecto a lo que menciona en su preámbulo el Estatuto de Roma, “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”, y que sólo opera donde un Estado no desee o no es capaz de ejercer su jurisdicción en relación con los crímenes del Estatuto de Roma.

1. **LOS DOS PRINCIPIOS PRESENTES EN LA CONVENCIÓN QUE SIRVEN PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL INDIVIDUO**

Es importante mencionar el artículo 28 de la convención: “Los Estados parte se comprometen a tomar, dentro de su marco de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad**,** que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente Convención”. Dicho articulado parece autorizar de una manera temerosa el ejercicio de una jurisdicción universal sobre las personas que realicen actos que vulneren la integridad de los bienes culturales materiales, los cuales son el objeto de la presente convención.

La convención se limita al plano normativo de la tipificación de los comportamientos que dan lugar a responsabilidad penal, dejando el aspecto institucional de la sanción a los Estados. Para la realización de la aplicación de la sanción derivada de la responsabilidad penal internacional del individuo, se hacen uso de distintas técnicas en el marco de la cooperación, tales como:

1. El principio de jurisdicción universal, y
2. El principio *aut dedere aut iudicare.*
3. **PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL**

El principio de universalidad posee una justificación interna y es aceptada por el derecho internacional cuando el hecho se dirige contra bienes de la cultura supranacional, en cuya protección existe un interés internacional, por ejemplo, prohibición del tráfico de drogas, comercio de esclavos, trata de blancas, distribución de publicación pornográficas, lucha contra la falsificación de moneda, protección de cables marítimos, represión de piratería aérea, de la toma de rehenes, de la tortura y del terrorismo, delitos contra el medio ambiente, crímenes de guerra y contra la humanidad.[[28]](#footnote-28) Sólo en supuestos de esta naturaleza están presentes las ideas de solidaridad del mundo cultural frente al delito y la lucha contra la peligrosa delincuencia internacional.[[29]](#footnote-29)

Este principio constituye una de las excepciones al principio de territorialidad de la ley penal, ya que conforme al principio de territorialidad, la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado, independientemente de la nacionalidad del delincuente.[[30]](#footnote-30)

El artículo 28 de la convención se vale del principio de jurisdicción universal, con el cual permite a los Estados parte de la convención aplicar su jurisdicción sobre los actos que vayan en contra de la Convención, sin importar si estos se cometieron fuera de su territorio y también con independencia de que sean aquellas personas sus nacionales. Como acertadamente pone de manifiesta Isabel Lira Delgado: “el principio de jurisdicción universal viene determinado principalmente en función de la existencia de determinados tipos de crímenes internacionales de especial gravedad y trascendencia que afectan los intereses de la comunidad internacional en su conjunto”.[[31]](#footnote-31)

Es así que las infracciones cometidas contra los bienes culturales que son objeto de la Convención, representan un interés para la comunidad internacional y su violación merece ser castigada por cualquier Estado, no sólo de aquellos en el cual haya sido cometido, o de las personas que aquél tiene por nacionales, por lo que los Estados deben aplicar la competencia universal, considerando que son violaciones *erga omnes* de conformidad al derecho internacional.

El Segundo Protocolo establece también jurisdicción universal respecto a las violaciones graves enunciadas en el artículo 15, porque se prevé la posibilidad de que la instancia judicial pertinente de un Estado Parte, debe ejercer su competencia para procesar al individuo, o grupo de individuos responsables por alguna de las referidas violaciones graves, cuando quien/es la comete/n sea/n nacional/es de ese Estado Parte, y estos hayan cometido esas violaciones en otro Estado Parte, o aquél que ha hecho dichas violaciones en otro Estado Parte sin ser nacional del Estado Parte donde se encuentra en ese momento.

1. **PRINCIPIO AUT DEDERE AUT IUDICARE**

*Aut dedere aut iudicare* es una locución [latina](http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn), que significa "extraditar o juzgar", utilizada en el [derecho internacional](http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional), este principio obliga al Estado en el que se encuentra el presunto culpable para que éste asuma competencia y pueda enjuiciarlo, así como también lo obliga a extraditarlo si otro Estado lo solicitara, siempre y cuando este último tenga jurisdicción para juzgarlo, sin perjuicio de que el Estado requerido niegue la solicitud de extradición del Estado requirente, pero se ve obligado a juzgarlo conforme sus propias leyes.

Los artículos 17 a 20 del Segundo Protocolo de 1999establece el principio de *aut dedere aut iudicare*, ya que en las disposiciones de los artículos antes mencionados, se adopta un sistema de enjuiciamiento o de extradición del delincuente.

El artículo 17 del Segundo Protocolo, en su párrafo 1 menciona que: “La Parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional”.

Básicamente lo que dice este artículo es: Se puede extraditar a una persona que haya cometido infracciones conforme al artículo 15 en sus apartados a) al c) en el territorio de otro Estado parte, en los supuestos de: que sea nacional del Estado requirente o, cuando la infracción se haya cometido en el territorio del Estado requirente. No obstante, si la persona se encontrará en el Estado requerido y éste no decide extraditar a tal persona al Estado requirente, debido a que el Estado requerido tiene jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 párrafo 1, inciso c),[[32]](#footnote-32) tendrá la obligación de someter el caso sin dilación a las autoridades competentes para que sea juzgado según su normatividad interna o, a las normas pertinentes del derecho internacional.

**VII. EL PAPEL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO**

El Estatuto de Roma entró en vigor el [1 de julio](http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio) de [2002](http://es.wikipedia.org/wiki/2002), por lo que sus disposiciones ya deben ser acatadas por todos los Estados parte del Estatuto de Roma. La CPI está íntimamente relacionada con el tema objeto de estudio, debido a que el Estatuto faculta a la Corte Penal Internacional para enjuiciar a los individuos de los que se sospeche que en presencia de un conflicto armado sea éste de carácter nacional o internacional, hayan encaminado ataques intencionales que constituyen un crimen de guerra, como serían los llevados en contra de “edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que estos edificios no sean objetivos militares”.[[33]](#footnote-33)

**VIII. DESTRUCCIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL ESTADO ISLÁMICO**

El Estado islámico o mejor conocido por sus siglas en idioma ingles ISIS (Islamic State in Iraq and Syria), es una organización de radicales islamistas que ha ganado presencia en Iraq, Siria y Libia, misma que se ha expandido a través de ejercer su poder militar. Esta organización se ha dedicado en su paso de conquista en el Medio Oriente a destruir vidas humanas, pero también se ha encargado de destruir y robar bienes culturales que son considerados patrimonio cultural de la humanidad.

A pesar de que Sira, Iraq y Libia[[34]](#footnote-34) son parte de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, ésta no ha sido aplicada como debería ser para que se realice el objeto de la citada convención, es pertinente mencionar que tanto Iraq como Siria no se han adherido o ratificado el Segundo Protocolo de la Convención.

Desde inicios del año 2014, ISIS ha estado destruyendo sitios históricos a través de los territorios Iraq, Siria y Libia. Por citar algún ejemplo de los bienes culturales que ha destruido este grupo, podemos recordar lo ocurrido en julio de 2014 en la Mosul, Iraq, en donde un grupo de personas perteneciente a ISIS irrumpió dentro del Museo de Mosul y destruyeron las estatuas pertenecientes a la cultura asiria.[[35]](#footnote-35)

1. **RESPUESTA INTERNACIONAL**

En junio de 2014, el Comité de los Cascos Azules de los Estados Unidos emitió una declaración en la cual hizo un llamado para la protección de los de los sitios en todo Irak y Siria. La declaración pidió a todas las naciones involucradas en los conflictos armados a respetar las convenciones internacionales y derecho internacional consuetudinario para proteger los sitios culturales y para detener los saqueos y venta de bienes culturales catalogados como muebles. [[36]](#footnote-36)

En febrero de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2199, que condenó específicamente la destrucción y el saqueo del patrimonio cultural en zonas de conflicto. Reconociendo que ISIS estaba generando ingresos de artefactos saqueados, por lo que instó a todos los Estados miembros a tomar las medidas adecuadas a detener la importación y venta de objetos robados.[[37]](#footnote-37)

En septiembre de 2014 la Unesco hizo un llamado de emergencia en Paris para discutir el número de sitios en riesgo o actualmente destruidos por ISIS y emitió un llamado de acción a todas las naciones involucradas en la región.[[38]](#footnote-38) El Director General de la Unesco Irina Burkova compartió las coordenadas de todos los principales sitios del patrimonio cultural con los Estados Unidos tan pronto como éste anunció su intención de comenzar ataques aéreos en Iraq.[[39]](#footnote-39)

También en septiembre de 2014, el Secretario de Estado John Kerry pronuncio un discurso ante una audiencia reunida en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el cual catalogo como de lo peor a las acciones que ha cometido ISIS, y además de prometer el patrimonio cultural en los sitios donde existen áreas de conflicto, el Secretario habló sobre colaborar con diversas organizaciones, incluyendo la Escuela Americana para Orientar la Investigación y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia para documentar sitios históricos, identificarlos en caso de una destrucción cercana y para desarrollar planes que ayudaran a preservarlos en el futuro.[[40]](#footnote-40)

1. **LIMITACIONES DE LAS CONVENCIONES QUE PROTEGEN LOS BIENES CULTURALES EN EL CASO DE ISIS**

Gran parte del problema radica en que el cuerpo normativo que regula y protege los bienes culturales en una situación de conflicto armado están descontextualizados con la época, es decir, la Convención de la Haya para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado fue esencialmente diseñada para una Guerra entre Estados, y no para conflictos de grupos radicales religiosos que tienen como objetivo tales bienes.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Convención de la Haya de 1954 sólo tiene competencia territorial respecto a conflictos armados internacionales como no internacionales, ésta no da una definición sobre que debemos entender por un conflicto no internacional.

Por ejemplo, una Comisión de Expertos de la Cruz Roja Internacional en el año de 1962, la cual se basó en el artículo 3° común a los cuatro convenios de Ginebra, definió el conflicto no internacional de la siguiente manera: “el conflicto armado interno comprendería las acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización. No puede considerarse en sentido técnico como conflicto armado interno las situaciones de tensión política o social en el interior de un Estado”.[[41]](#footnote-41)

Así las cosas, el conflicto en Siria ha sido catalogado como un conflicto de carácter no internacional, por lo que la protección que se le ofrece en este momento es la de la Convención de la Haya de 1954, que como vimos es demasiado limitada en cuanto a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, pero ahora que Estados Unidos y otros países se han unido para combatir a dicho grupo radical islámico, puede ser considerado un conflicto internacional. No obstante lo anterior, aún existe un conflicto no internacional interno, y es el que está suscitándose dentro de Siria y es el de los rebeldes en contra del gobierno de Bashar al-Assad.

ISIS no está reconocido como un Estado formal o un Estado miembro de las Naciones Unidas por lo que no puede ser incluso parte de la Convención, pero la falta formal por parte de ISIS en dicho tratado, no lo debiera eximir de la responsabilidad de prevenir lo que enuncian los tratados. Después de todo, el Director General de la Unesco categorizó la reciente destrucción de Nimrud como un crimen Guerra.[[42]](#footnote-42)

Respecto a Iraq y Siria, podemos decir que no han ratificado o adherido al Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954, lo anterior es muy importante y puede beneficiar en gran medida a los bienes culturales presentes en dichos países que es donde se ha cometido un mayor atropello a estos. Como mencionamos en su momento, el Segundo Protocolo termina o intenta hacerlo respecto a la vaguedad que rodea a las disposiciones de la Convención, en lo referente a la protección de los bienes culturales y cuando ésta puede no ser respetada, ya que este Segundo Protocolo contiene una serie detalla de reglas en las que menciona en qué circunstancias es factible dicha excepción. Aunque de nueva cuenta, este acuerdo no prevé la posibilidad de un ataque deliberado por un grupo extremista no gubernamental.

Tanto Iraq y Siria no son parte del Estatuto de Roma, el cual da vida a la Corte Internacional de Justicia, por lo que ésta no tiene jurisdicción sobre dichos territorios, a menos que dichos países recurran a pedir ayuda a la CIJ, o al menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirija la situación a la CIJ.[[43]](#footnote-43)

1. **ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA PRESERVAR LOS BIENES CULTURALES DURANTE EL CONFLICTO CON ISIS**

Para proteger dichos bienes debe removerse la excepción respecto a la excepción de respetar los bienes culturales utilizados como objetivos militares, si bien es cierto el Segundo Protocolo es más explícito y además que tanto Iraq como Siria no son parte de este último, si lo son con respecto a la Convención de 1954 y es aquí donde se menciona dicha excepción, pero sin enumerar los casos posibles de excepción.

Es importante traer a colación lo que es digno de recordarse para la posteridad, en la Primer Guerra del Golfo Pérsico, Comandantes Militares se retractaron de derribar dos Aviones MIG porque iban a aterrizar cerca de un templo en Ur. En esta situación existía una excepción al respeto de dicho templo considerado como un bien cultural, toda vez que éste estaba siendo utilizado para fines militares, pero no obstante dicho hecho, no se hizo uso de la figura contemplada de una *necesidad militar,* cuestión que hubiera sido fácilmente de argüir a su favor, toda vez que la destrucción de dichos aviones pudo haber constituido una meta o logro militar. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América reportó que al Congreso de los Estados Unidos que se optó por la decisión de no bombardear en aras de preservar el sitio arqueológico, por lo que se ponderó la situación y la importancia de preservar los bienes culturales al final prevaleció.[[44]](#footnote-44)

Ahora que las naciones de Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos están encabezando ataques y bombardeos, y a la vez Estados Unidos ha ofrecido apoyo a las tropas iraquíes, estos deben ponderar el concepto de necesidad militar en contra de preservar los sitios históricos para el futuro, y lo menos destructivo deberá ser siempre elegido.

**IX. C O N C L U S I O N E S**

A raíz de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional apreció que el patrimonio cultural se encontraba en latente y gran peligro, por lo que se buscó protegerlos y presérvalos para la posteridad, y así fue como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como Unesco), adoptó la Convención de La Haya de 1954, y entró en vigor el 07 de agosto de 1956.

A la Convención de 1954 se le debe reconocer por ser el primer instrumento internacional que se preocupó por la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y por consiguiente, debido al tiempo en la que fue redactada algunas de sus disposiciones ya no son armónicas con la realidad social. Sabemos que la evolución de las sociedades humanas rebasa por mucho a las leyes que deben regularizarla, esto lo podemos ver claramente en el requisito para protección especial que señala que deben estar “a suficiente distancia” de objetivos militares potenciales. Esto era factible anteriormente, debido a que la población mundial era mucho menor, pero ahora con el incremento demográfico existe una mayor urbanización, por lo que es más difícil que un bien cultural se encuentre a “suficiente distancia “de un objetivo militar.

También hay que tener presente que en 1954 cuando apenas estaban en ciernes el reconocimiento de los derechos de las personas en el plano internacional y el hecho de ser el primer instrumento vinculante de carácter internacional de protección a bienes en caso de conflicto armado, no pudo prever o hacer más específicas algunas disposiciones, es por eso que encontramos en la convención algunas disposiciones subjetivas, las cuales determinan deberes de las partes de una manera general, derivado lo anterior se hace uso de una terminología imprecisa, por consiguiente se dejó un amplio margen de decisión a cada Estado Parte para llevarlas a cabo, sin embargo, no fue hasta el año de 1999 que se creó el Segundo Protocolo (por los motivos anteriormente vertidos en el artículo) con el fin de completar y hacer mención de algunas disposiciones que no hacía referencia la Convención.

El Segundo Protocolo perfecciona el mecanismo de control de la obligación de cumplimiento, mediante la definición de las violaciones graves y confiere a los Estados la llamada jurisdicción universal, por lo que los Estados parte pueden ejercer jurisdicción sobre esas violaciones, también rompe con la vaguedad del artículo 3 de la Convención, y ya hace mención de lo que se entenderá por medidas de salvaguarda en tiempos de paz, tales como: la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia, la protección in situ de los bienes culturales muebles o su traslado en condiciones adecuada, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguarda de dichos bienes.

En lo referente a su ámbito de validez territorial, el Segundo Protocolo extendió también su ámbito a los conflictos armados no internacionales, y a la vez que este protocolo se debe aplicar en su totalidad a estos tipos de conflictos, así como también se enuncia en que casos se puede hacer uso de una necesidad militar imperativa, lo cual anteriormente la Convención de 1954 no se hacía mención de lo anterior y por último, crea la protección reforzada.

La convención y el Segundo Protocolo hacen uso de los dos principios que sirven para la aplicación de la responsabilidad penal del individuo, de esta manera los Estados parte de la convención y el protocolo quedan autorizados para enjuiciar a personas que hayan cometido infracciones contra bienes culturales fuera de su país y en contra de personas que no sean tengan por nacionales o que cuenten con la nacionalidad del país enjuiciante. También pueden hacer uso de la cooperación procesal internacional utilizando el recurso de extradición, cuando otro Estado que tenga jurisdicción pueda reclamarlo. Con estos principios se evita que la persona pueda quedar impune, y así cada Estado ejercer su jurisdicción para juzgarlos o cooperar internacionalmente con otros Estados para su detención y extradición.

En lo referente al grupo denominado ISIS, éste no se encuentra regido por el derecho internacional porque no es un Estado reconocido, por lo que no puede ser parte de ningún tratado de derecho internacional, además de que carece de la intención de preservar los bienes culturales, pues es parte de su estrategia militar y política la destrucción de los mismos.

Ahora, para preservar los bienes culturales en esa región, las naciones que están interviniendo en el conflicto en esa parte geográfica del mundo, deben considerar estos sitios protegidos de cualquier acción militar, excepto cuando se lleve a cabo un verdadero y exhaustivo balance para que estas acciones militares sean llevadas a cabo.

Los países afectados como Siria e Iraq aunque no sean parte del Estatuto de Roma, pueden requerir ayuda directa a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, justamente como lo hizo el Estado de Mali, y de esta manera las Cortes de Iraq y Siria en conjunto con la CIJ pueden estar preparadas para juzgar a los responsables de la destrucción del patrimonio cultural de la humidad.

Se concluye finalmente que las expectativas de la convención son muy elevadas, ya que sabemos que no se respetan cabalmente las disposiciones de la misma, toda vez que todo proceso bélico lleva ineluctablemente por su misma naturaleza la destrucción indiscriminada, a la que no escapan por ende los bienes culturales. Aunque las fuerzas castrenses estén enteradas a nivel de los altos mandos de los acuerdos acerca de la preservación y conservación de los bienes culturales, el factor humano vindicativo suele intervenir negativamente, deviniendo en la destrucción de los multicitados bienes culturales, concluyéndose que la destrucción deliberada de los bienes culturales no depende únicamente de la capacidad cultural e intelectual de quienes la ordenan y las llevan a efecto, sino también de factores que dependen de la misma naturaleza humana que llevada por el odio, el rencor y el deseo de venganza, llevan a quienes tienen el poder de preservarlas y conservarlas a la destrucción de las mismas.

No obstante lo anteriormente expuesto, no se debe claudicar en la intención de concientizar a las partes que intervienen en conflictos bélicos en que guarden respeto por la normatividad internacional acordada en los tratados.

**X. FUENTES DE CONSULTA**

**Bibliografía**

Cuello Calón, Eugenio, *Derecho penal*, 8ª ed., Barcelona, Bosch, 1980.

Jescheck, Hans-Heinrich, *Tratado de derecho penal, parte general*, 5ª ed., Granada, Colmenares, 2002.

Lirola Delgado, Isabel y Martín Martínez, Magdalena M., *La Corte Penal Internacional, Justicia versus Impunidad*, Barcelona, Ariel, 2001.

Motilla de la Calle, A., *Régimen jurídico de los bienes histórico-artísticos de la Iglesia católica*, Madrid, Eurolex.

Giannini, G. “I Benni Culturali”, *Revista Trimestale di Diritto Pubblico*, Italia, 1976, p. 5., citado en Motilla de la Calle, A., *Régimen jurídico de los bienes histórico-artísticos de la Iglesia católica*, Madrid, Eurolex, 1995.

**Hemerografía**

López de Castro, Marta Guerra, “los bienes culturales, noción y regulación en el derecho español, con especiales referencias al patrimonio de la Iglesia católica”, *Revista Chilena de Derecho,* Chile, vol. 31, núm. 2, mayo-agosto de 2004, disponible en <http://www.jstor.org/stable/41614021?seq=1#page_scan_tab_contents>, consulta: 11/12/15.

**Sitios de internet**

Mesografía

“A Call to Save Iraq’s Cultural Heritage”, Unesco, disponible en <http://en.unesco.org/news/call-save-iraq%E2%80%99s-cultural-heritage>, consulta: 16/12/2015.

“Blue Shield Statement’s on Iraq”, U.S. COMM OF THE BLUE SHIELDS, disponible en <http://uscbs.org/news/blue-shields-statement-on-iraq/>, 16/12/2015

<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/09/232028.htm>, consulta: 16/12/15.

<http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647152&_dad=portal30&_schema=PORTAL30>, consulta: 18/12/2015.

<http://uscbs.org/news/2014-uscbs-annual-meeting/>, consulta: 18/12/2015.

<http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003>, consulta: 12/12/15.

“Practice Relating to Rule 39. Use of Cultural Property for Military Purposes”, International Committee of the Red Cross, disponible en <https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule39>. consulta: 16/12/15.

“Threats to Cultural Heritage in Iraq and Syria”, U.S. Department of State, disponible en <http://news.nationalgeographic.com/2015/09/150901-isis-destruction-looting-ancient-sites-iraq-syria-archaeology/>*.* consulta: 15/12/16.

“Unesco, Director General Condemns Destruction of Nimrud in Iraq”, Unesco, disponible en <http://whc.unesco.org/en/news/1244/> consulta: 18/12/2015.

<http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1504032_ES.pdf>, consulta: 18/12/2015.

**Legislación**

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Trasferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970.

Convención para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 1954.

Protocolo a la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 1954.

Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1999.

1. Giannini, G. “I Benni Culturali”, *Revista Trimestale di Diritto Pubblico*, Italia, 1976, p. 5. Citado en Motilla de la Calle, A., *Régimen jurídico de los bienes histórico-artísticos de la iglesia católica*, Madrid, Eurolex, 1995, p. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. López de Castro, Marta Guerra, “Los bienes culturales, noción y regulación en el derecho español, con especiales referencias al patrimonio de la Iglesia católica”, *Revista Chilena de Derecho*, Chile, vol. 31, núm. 2, mayo-agosto de 2004*,* <http://www.jstor.org/stable/41614021?seq=1#page_scan_tab_contents>,consulta: 11/12/15. [↑](#footnote-ref-2)
3. El patrimonio cultural se divide en dos tipos: tangible e intangible. El patrimonio cultural intangible incluye las tradiciones de los pueblos, es considerado como patrimonio cultural inmaterial, y éste cuenta con su propia convención a nivel internacional: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

   El patrimonio cultural tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. Éste, a su vez, puede clasificarse en mueble e inmueble. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Cfr.* <http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003>, consulta: 12/12/15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Traducción libre: "... aquel bien cuyo valor constituya material testimonial del grado de civilización...", citado en Giannini, G., “I Benni Culturali”, *op. cit.,* nota 2,p. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Las dos teorías restantes son: la teoría de las limitaciones de la propiedad, la cual mantiene la tesis que la administración está facultada para imponer una serie de limitaciones al ejercicio de la propiedad privada de estos bienes, esta teoría adolece en cuestión de que no aborda las características intrínsecas del régimen de los bienes culturales y únicamente se limita a señalar los límites a la propiedad privada. La *teoría de los bienes privados de interés público* hace referencia a los bienes llamados funcionalizados: “su condición jurídica se refiere sobre todo a que los bienes están dotados, una intrínseca y original cualidad para satisfacer un interés público. La administración está dotada de poderes a fin de asegurar su destino público. Así, son considerados los bienes culturales como resultado de la protección objetiva del régimen publicista de tutela del patrimonio. El régimen jurídico del bien se articula alrededor de la exigencia de la conservación y de la satisfacción del interés público”. Cfr. López de Castro, Marta Guerra, *op. cit.,* nota 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr., *idem*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Motilla de la Calle, A., *op. cit*., nota 2, p. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 10 del Segundo Protocolo de 1999. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. artículo 30 del Segundo Protocolo. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cfr. artículos 3 y 22 del Segundo Protocolo de 1999. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 5 del Segundo Protocolo de 1999. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 4 de la Convención de La Haya de 1954. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr. el artículo 13 del Segundo Protocolo. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 6, apartado c), del Segundo Protocolo de 1999. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 6, apartado d), del Segundo Protocolo de 1999. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 15 del Segundo Protocolo. [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 15 del Segundo Protocolo, párrafo 1, inciso b) [↑](#footnote-ref-18)
19. Acuerdo para el Establecimiento de un Tribunal Militar Internacional Encargado del Juicio y Castigo de los Principales Criminales de Guerra de los Países del Eje Europeo, Londres, 8 de agosto de 1945. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cfr. Resolución No. 95 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 11 de diciembre de 1946. En la 123 sesión, celebrada el 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la Resolución No. 177 (II) por la que encargó a la Comisión de Derecho Internacional la formulación de los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (Principios de Núremberg). Dentro de estos principios se encuentra plasmado el reconocimiento de la responsabilidad penal individual en el ámbito internacional. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cfr. Resolución. 827 del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, para perseguir a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia desde 1991. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr. Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/955 (1994). [↑](#footnote-ref-22)
23. Lirola Delgado, Isabel y Martín Martínez, Magdalena M., *La Corte Penal Internacional. Justicia versus impunidad*. España, Ariel Derecho, 2001, p. 19. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibidem*, p. 15. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibidem,* p. 9. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Idem.* [↑](#footnote-ref-26)
27. El siete de septiembre de dos mil, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho. Fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintiuno de junio de dos mil cinco, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de septiembre del propio año. El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal el diez de octubre de dos mil cinco, fue depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el veintiocho del propio mes y año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 (2) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Para que sea obligatorio en la totalidad del territorio y para proveer en la esfera administrativa su exacta observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Promulgación, el día 31 de Diciembre de 2005. [↑](#footnote-ref-27)
28. El patrimonio cultural de cada pueblo forma parte del patrimonio cultural de toda la humanidad. Los actos en contra dichos bienes constituyen crímenes contra el patrimonio común de la humanidad. El Estatuto de la Corte Penal Internacional considera crímenes de guerra a “ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que estos edificios no sean objetivos militares”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Jescheck, Hans Heinrich, *Tratado de derecho penal*, *parte general*, 5ª ed., Granada, Colmenares, 2002, p.182. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cuello Calón, *Derecho penal*, Barcelona, Bosch, 1980, p.239. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lirola Isabel y Delgado, Magdalena, Martín, *op. cit*., nota 23, p.22 [↑](#footnote-ref-31)
32. Cada parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos: c) cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) al c) del primer párrafo del artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el territorio de este Estado. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Cfr*., artículo 8 b) ix). [↑](#footnote-ref-33)
34. Iraq ratificó la convención y el Primer Protocolo el 21 de diciembre de 1967, Libia ratificó el 19 de noviembre de 1957, Siria ratificó el 06 de marzo de 1958.

    Tanto Iraq como Siria no han suscrito, ni ratificado el Segundo Protocolo de la convención citada; por su parte, Libia se adhirió a éste el 20 de julio de 2001. [↑](#footnote-ref-34)
35. Si desea consultar los sitios afectados por ISIS, la información se encuentra disponible en <http://news.nationalgeographic.com/2015/09/150901-isis-destruction-looting-ancient-sites-iraq-syria-archaeology/>, consulta: 15/12/16. [↑](#footnote-ref-35)
36. “Blue Shield Statement’s on Iraq”, U.S. COMM OF THE BLUE SHIELDS, disponible en <http://uscbs.org/news/blue-shields-statement-on-iraq/>, consulta: 18/12/2015. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Cfr.* <http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1504032_ES.pdf>, consulta: 18/12/2015. [↑](#footnote-ref-37)
38. “A Call to Save Iraq’s Cultural Heritage”, Unesco, disponible en <http://en.unesco.org/news/call-save-iraq%E2%80%99s-cultural-heritage>, consulta: 16/12/2015. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Cfr.* <http://uscbs.org/news/2014-uscbs-annual-meeting/>, consulta: 18/12/2015. [↑](#footnote-ref-39)
40. “Threats to Cultural Heritage in Iraq and Syria”, U.S. Department of State, disponible en <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/09/232028.htm>, consulta: 16/12/15. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Cfr*. <http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647152&_dad=portal30&_schema=PORTAL30>, consulta: 18/12/2015. [↑](#footnote-ref-41)
42. “Unesco Director General Condemns Destruction of Nimrud in Iraq”, Unesco, disponible en <http://whc.unesco.org/en/news/1244/>, consulta: 18/12/2015. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Cfr*. Artículos 12 y 13 del Estatuto de Roma. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Cfr*. “Practice Relating to Rule 39. Use of Cultural Property for Military Purposes”, International Committee of the Red Cross, disponible en <https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule39>, consulta: 16/12/15. [↑](#footnote-ref-44)